

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

Por sentencia dictada con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, en causa RIT T-1161-2023, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se acogió la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales estando vigente la relación laboral y, en consecuencia, ordenó el pago de a suma que detalla por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, con reajustes e intereses, ordenando remitir además la sentencia a la Contraloría General de la República para los fines que indica, sin costas.

Contra dicho fallo recurrieron de nulidad ambas partes.

La parte denunciante invocó como causal principal de invalidación la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo; como primera causal subsidiaria, cita lo dispuesto en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 4 y 6 y por omisión de los requisitos previstos en el artículo 495 N° 2, 3 y 4 del Código Laboral; como segunda causal subsidiaria refiere la prevista en el artículo 478 letra c) del Código del ramo; y, como tercera causal en subsidio de las anteriores, aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su variante de infracción de ley.

La parte denunciada, por su parte, invoca como motivo principal la causal reglada en el artículo 478 letra b) del Código Laboral, y como causal subsidiaria, la dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado con infracción de ley.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en audiencia, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

**CONSIDERANDO:**

**I.- En cuanto al recurso de nulidad deducido por la parte denunciante:**

**PRIMERO:** Que el denunciante invoca como causal principal la prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haber sido dictada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en relación con el artículo 456 del mismo Código.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PZXEXYLSKDD

Luego de referirse al concepto de “sana crítica”, indica que el fallo no cumplió con ese estándar valorativo, apartándose de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia al no considerar que el cambio de funciones y baja en las remuneraciones del denunciante, especialmente en la forma en que fue realizado, es un acto vulneratorio a sus derechos. Aún más, ese fue el primer hecho con el que se dio inicio a los siguientes actos de vulneración.

Señala que probó que se cuestionó en forma ilegal las capacidades y competencias del trabajador, en forma verbal, por parte de la Gerente de CONAF el 30 de marzo de 2023, lo que se expuso tanto en la denuncia judicial como en la denuncia ante la Inspección del Trabajo, antecedentes de los que debió concluirse que la remoción del cargo y la baja de sus remuneraciones constituyen una vulneración de sus derechos laborales. Agrega que no se ponderó ni analizó conforme a las normas de la sana crítica la sentencia dictada en causa RIT N° I-360-2023 por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por reclamo presentado por la denunciada -CONAF- en contra de la Resolución N° 1287/23/30 de 30 de mayo de 2023, en que se determinó que el cambio de funciones y remuneraciones hecho en forma verbal respecto del actor constituía una infracción laboral al haberse alterado unilateral y discrecionalmente la función de “Jefe de Departamento Prevención de Riesgos Profesionales” a “Profesional” y sus remuneraciones del grado 5 al grado 12 de la Escala Única de Remuneraciones.

Afirma que, de haberse razonado conforme a las reglas de la sana crítica, el sentenciador habría determinado que la modificación de funciones y rebaja de remuneraciones del actor es un acto vulneratorio.

Sostiene que lo anterior también es contrario a la prueba indiciaria aportada y lo señalado por el absolvente de la denunciada y los testigos Alejandra Pizarro, Francisco Serrano y Fabian Luengo, quienes reconocen que no existe justificación ni anexo de contrato que modifique sus condiciones laborales. Agrega que las respuestas ambiguas y contradictorias de los testigos de la CONAF solo permiten concluir que el acto denunciado -cambio de funciones y baja en las remuneraciones- es vulneratorio de los derechos del trabajador, por aplicación del principio *pro operario*.

Añade, a mayor abundamiento, que la sentencia cuestionada al establecer en su considerando 11° que la cesación en el cargo no es



revisable por esta vía, por haber sido interino, contiene un razonamiento errado, pues el procedimiento no tiene esa finalidad, sino que establecer que los actos que lo conforman son vulneratorios, en especial tomando en cuenta que no existe ningún acto formal que lo disponga.

Continúa destacando que al reconocer la sentencia en el considerando 12° que la denunciada no desarrolló conductas positivas para reinsertarlo, no reparó en que los diferentes actos de vulneración son continuos y permanentes, con su origen en el 30 de marzo de 2023. Hace presente que en el considerando 13° se reconoce que hubo maltrato y afectación del ánimo del trabajador, pero se limita a los hechos posteriores a la cesación del cargo, separación artificial que ignora que forman parte de una misma conducta vulneratoria, lo que demuestra que existe una infracción a las normas sobre apreciación de la prueba.

Igualmente asevera que al haberse establecido en la parte final del considerando 14° que la remuneración que le corresponde según el grado 12 es \$1.437.290, que es la que considera para el cálculo de la indemnización por daño moral, se aparta de la prueba allegada al juicio, en que se acompañó liquidación de marzo de 2023, correspondiente a la última antes de la presentación de la acción, en que se detalla un sueldo bruto de \$6.121.350, debiendo haberse calculado en base a esa cantidad. Además, afirma que la indemnización por daño moral debió contemplar las cantidades no pagadas producto de la diferencia entre el grado 12 y el grado 5 desde abril de 2023 a la fecha en que se dictó la sentencia, por no haber existido modificaciones en su contrato o un acto que lo permitiera, evidenciando una vulneración a sus derechos fundamentales, lo que también es contrario a las máximas de la experiencia y normas sobre valoración de la prueba.

Finaliza este capítulo razonando que de haberse aplicado correctamente las reglas de la sana crítica, la sentencia necesariamente habría acogido la demanda en todas sus partes, estableciendo que no correspondía aplicar la modificación de funciones del actor ni una baja de sus remuneraciones, por lo que la denunciada debe pagar la diferencia de las remuneraciones correspondiente al grado 5 de la E.U.R. desde abril de 2023 en adelante, más las indemnizaciones solicitadas, las disculpas pertinentes y las demás peticiones contenidas en su demanda.



**SEGUNDO:** Que, en subsidio de la anterior, invoca la causal establecida en el artículo 478 letra e) del Código Laboral, por haberse dictado la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en los artículos 459 y 495 del mismo Código, en la forma que detalla y da por reproducido lo expuesto en la causal anterior en lo referido a la falta de incorporación, análisis y pronunciamiento sobre la prueba documental.

Sostiene que en el fallo impugnado concurren todos los vicios establecidos en la causal de nulidad, es decir, omisión de requisitos previstos en la ley para la dictación de la sentencia definitiva, contener decisiones contradictorias y decisión incongruente.

En lo que respecta al primero, lo relaciona con el requisito contenido en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, reiterando que la sentencia no hace un análisis detallado de toda la prueba documental y testimonial presentada, especialmente respecto a la acreditación de las sumas dejadas de percibir desde abril de 2023 en adelante, habiéndole correspondido recibir el sueldo del grado 5, de acuerdo con la última modificación al contrato vigente del año 2022.

A su vez, denuncia que no se pondera en la sentencia prueba documental consistente en el fallo dictado en la causa de reclamación de multa, de modo que no se analizó toda la prueba rendida, constituyendo una infracción al deber de fundamentación. Indica que esa prueba permitía establecer junto a los demás medios probatorios que el cambio de funciones y la baja en su remuneración fue ilegal.

También denuncia como omitido el requisito previsto en el artículo 459 N° 6 del Código Laboral, es decir, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, con expresa determinación de las sumas que ordene pagar o las bases necesarias para su liquidación, si fuere procedente. Afirma en este punto que existe una clara y evidente omisión respecto al pronunciamiento de todas las sumas de dinero reclamadas, pues la sentencia no decide de manera específica sobre las sumas que dejó de percibir producto de la rebaja verbal de sus remuneraciones y tampoco abordó la solicitud de restituir las sumas que dejó de percibir en relación al daño moral, limitándose a otorgar una indemnización por daño moral diferente, que no se



ajusta a derecho y se relaciona con una remuneración distinta a la que correspondía.

Además, acusa que la sentencia no dio cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 495 N° 2, 3 y 4 del Código Laboral, ni a la obligación de velar porque la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y abstenerse de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva; no establece el apercibimiento de sanciones para el caso de persistir en el comportamiento antijurídico ni su cese inmediato y no contiene la indicación concreta de las medidas a que está obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración, bajo el apercibimiento del artículo 492 del Código Laboral, incluidas las indemnizaciones que procedan.

Sumado a todo lo anterior, cuestiona que la sentencia tiene decisiones contradictorias e infringe el principio de congruencia en lo relativo a las remuneraciones del denunciante y las pretensiones económicas solicitadas; contradicción que, en su concepto, se verifica entre lo establecido y razonado en el considerando 11° del fallo y la decisión de terminar acogiendo la demanda en la forma que indica.

**TERCERO:** Que, en subsidio de las causales anteriores, cita como motivo de impugnación del fallo lo dispuesto en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Da nuevamente por reproducidos todos los argumentos previos, agregando que la remoción del cargo de Jefe de Departamento sin una justificación adecuada y en contravención al perfil del cargo constituye una vulneración al derecho a la no discriminación arbitraria y al derecho a la integridad psíquica del trabajador, amparados por el artículo 19 N° 2 y 1 de la Carta Fundamental, respectivamente.

Agrega que la baja en las remuneraciones que implicó una reducción del grado 5 al grado 12, sin justificación objetiva y razonable, y sin anexo de contrato que lo establezca o permita, constituye una vulneración al derecho a la integridad psíquica y la honra del denunciante, protegidos por el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política.



A su vez, la designación de un profesional que no cumple el perfil requerido para el cargo y en contravención al Decreto Supremo N° 40 sobre Prevención de Riesgos Profesionales, es una vulneración al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, consagrado en el artículo 19 N° 2 del texto Constitucional.

Sostiene que esos hechos, ya establecidos por el tribunal, deben ser recalificados jurídicamente como vulneraciones a los derechos fundamentales del trabajador, en el contexto de la relación laboral y su correcta calificación llevará a concluir que la remoción del cargo y la baja en sus remuneraciones, también constituyen una vulneración de sus derechos laborales, lo que debería reflejarse en la sentencia y las medidas reparatorias ordenadas, estableciendo su pago.

**CUARTO:** Que, en subsidio de todas las anteriores, la parte denunciante invoca el motivo de invalidación contemplado en el artículo 477 del Código del Trabajo, por considerar que el fallo fue dictado con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo, en relación con los artículos 485 y siguientes y artículo 459 N° 4 del mismo Código, al reconocer la vulneración de derechos fundamentales pero de manera parcial, excluyendo un hecho que es parte de la vulneración y que es su origen, privándolo de manera ilegal y antojadiza de su derecho a la remuneración pactada en forma íntegra.

Reitera que la sentencia estableció una indemnización por daño moral calculada respecto de una remuneración que no le corresponde, debiendo haber recibido por ese concepto la suma ya indicada previamente y reitera también consideraciones respecto de la valoración de la prueba para los efectos de determinar que la remoción del interinato importó una vulneración de derechos fundamentales.

Finaliza su escrito formulando como petición común que se acoja el recurso por alguna de las causales deducidas en forma subsidiaria una de la otra, invalidando la sentencia recurrida y dictando al efecto sentencia de reemplazo que haga lugar a la denuncia en todas y cada una de sus partes y demás prestaciones demandadas, con costas de la causa y del recurso, sin perjuicio de la facultad de corrección de oficio concedida en virtud del artículo 479 del Código del Trabajo.



**QUINTO:** Que tocante a la causal principal de nulidad, afincada en el literal b) del artículo 478 del Código del Trabajo, de un modo persistente y reiterado se ha venido indicando por esta Corte que busca controlar el *razonamiento probatorio* contenido en la sentencia, con miras a verificar que en esa actividad no se hayan contrariado o vulnerado los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Expresado, en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que *las razones* vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos. Para ese fin, el recurrente ha de ser capaz de demostrar el error, precisando en su impugnación cuáles hechos estarían incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa de ese error.

Para que prospere la causal alegada por el reclamante, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

**SEXTO:** Que, sin embargo, como se puede colegir de la lectura del arbitrio, éste se circunscribe a discrepar de manera genérica de la ponderación de algunas de las probanzas incorporadas al juicio, básicamente documental y testimonial, formulando su propia apreciación de tales medios de convicción y criticando el raciocinio valorativo que hace el juez de base. En otras palabras, difiere de las conclusiones a que llegó el sentenciador y postula una nueva apreciación de la prueba favorable a la postura que ha sostenido en el juicio. Esto es, en esencia, un argumento propio de una apelación.

**SÉPTIMO:** Que, siguiendo este orden de ideas, pese a lo extenso de sus argumentaciones el recurrente ni siquiera denuncia cuál sería la regla de la sana crítica que se habría visto transgredida en la sentencia, limitándose a indicar que el juez contraría la lógica y las máximas de la experiencia. Su tesis apunta únicamente a que en esta sede se valore nuevamente la prueba rendida en el juicio de una forma que avale su teoría del caso, vale decir, que la vulneración de derechos fundamentales acaeció en los términos que señala.



Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que adicionalmente el recurrente denuncia la omisión de ponderación de ciertas probanzas -circunstancia que, como se verá, no es efectiva- vicio que es propio de otro motivo de invalidación.

De esta forma, lo cierto es que no se satisfacen los requisitos de la causal establecida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por lo que necesariamente debe ser rechazada sin entrar en otra clase de consideraciones.

**OCTAVO:** Que, en cuanto a la primera causal deducida en forma subsidiaria, en su desarrollo se evidencia que bajo el mismo capítulo el recurrente denuncia de distintos vicios de nulidad.

Esta causal está contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo de la siguiente manera: *“El recurso de nulidad procederá, además: e) cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue”*.

De acuerdo con el impugnante, primeramente, la sentencia infringe el N° 4 del artículo 459 del Código del Trabajo, esto es, aquella norma que señala que la sentencia definitiva debe contener *“El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación”*.

Conforme a esta hipótesis de invalidación, el legislador exige al sentenciador que, luego de analizar las pruebas rendidas en el juicio, exponga las razones que, en definitiva, lo llevaron a una determinada conclusión. Se trata de exteriorizar el proceso interno que hace el fallador, en forma razonada, lógica y coherente, lo que resulta necesario pues permite el control de las decisiones judiciales dentro del proceso.

Como indispensable correlato de lo anterior, la causal invocada requiere, para ser acogida, los siguientes requisitos copulativos: a) que el recurrente singularice cuáles fueron los medios de prueba omitidos; b) que el sentenciador efectivamente haya omitido el análisis de determinados medios





de prueba en su sentencia; y c) que esa omisión influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Empero, en el arbitrio se acusa la omisión de análisis de la prueba rendida, mencionando que la sentencia “no realiza un análisis detallado de la prueba documental y testimonial”, en el aspecto que indica, sin precisar cuáles serían estas probanzas; lo que no cumple el primer requisito aludido. Luego, denuncia que no se ponderó la sentencia pronunciada por el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, la que sí fue considerada, tal como se lee en el párrafo segundo del motivo noveno del fallo en estudio.

No se configura entonces el primer vicio denunciado.

**NOVENO:** Que se acusa también bajo este capítulo, que la sentencia contendría decisiones contradictorias.

Para entender concurrente este vicio es requisito que la sentencia contenga dos o más decisiones antagónicas o incompatibles entre sí, de manera que no sea posible cumplirlas porque se contradicen y no se puedan obedecer simultáneamente. Contradictorias son aquellas proposiciones en que una afirma lo que la otra niega y deben estar contenidas en la parte resolutive del fallo y no en otra de sus secciones, porque aquella es la que contiene las decisiones. La contradicción de un considerando con lo decisorio no implica la concurrencia del vicio en análisis ya que lo que prima es la determinación que se adopte, aun cuando no concuerde con la fundamentación de la misma. Menos aún puede presentarse entre los diversos motivos de un fallo, aun cuando sean calificados como resolutivos, porque la calificación que le asigne una parte a determinada institución de derecho no cambia la naturaleza jurídica de la causal que se invoca.

En la especie, la supuesta contradicción se predica respecto de un fundamento del fallo con una de sus decisiones; ello es suficiente para desechar la causal de nulidad invocada también en esta parte.

**DÉCIMO:** Que, por último, bajo el mismo capítulo se acusa la omisión de la decisión del asunto controvertido, respecto del pronunciamiento de todas las sumas reclamadas y las medidas contempladas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 495 del Código del Trabajo. Tal acusación no es efectiva. El tribunal se pronuncia sobre cada uno de estos asuntos, pero de manera concordante con los hechos que se dan por establecidos en el fallo y la



calificación jurídica que les asigna, en especial, en cuanto desecha que la cesación en el cargo del actor sea un acto vulneratorio de derechos fundamentales. En línea con lo anterior, la sentencia contiene los pronunciamientos que el recurrente echa en falta, solo que éstos no satisfacen -en su totalidad- las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, en esta parte esta causal subsidiaria de nulidad nuevamente será desestimada.

**UNDÉCIMO:** Que respecto de la hipótesis de invalidación estatuida en el literal c) del artículo 477 del Código del Trabajo, es indispensable señalar, de manera preliminar, que ella autoriza la nulidad del fallo cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. Este motivo de nulidad exige, de manera perentoria, la fidelidad a los hechos ya asentados en el proceso por el juez del grado, sin que puedan ser revisados por esta Corte.

Anotado esto, resulta pertinente indicar que de acuerdo con el sustrato fáctico asentado en el proceso, el actor fue designado el 1 de junio de 2022 como Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales en calidad de interino; que permaneció en el cargo hasta el 30 de marzo de 2023; que en el anexo de contrato se estableció *“En caso de que la Corporación Nacional Forestal determine con su posterioridad asignar dichas funciones a otro/a dependiente así como también se presenten situaciones de reestructuración organizacional, supresión de funciones o cambio de dependencia que afecten a él/la trabajadora/a, el/la compareciente volverá a percibir el grado 12° Profesional de la E.U.R. en propiedad.”*

Asimismo, asentó el tribunal, en lo pertinente, que de acuerdo del Reglamento Interno de Orden higiene y seguridad de la denunciada en su versión de julio de 2021 establece que respecto de la provisión de cargos *“... la Dirección Ejecutiva o el Director Regional en su caso nombrará un interino que cumpla el perfil del cargo, cuyo plazo no deberá exceder los 6 meses de permanencia y su calidad contractual deberá ser empleado o jornal permanente, de manera excepcional podrá ser nombrado como interino un trabajador que no cumpla con el perfil del cargo o sea jornal transitorio indefinido...”*.



Sobre la base de tales presupuestos de hecho, el tribunal desestimó una vulneración de derechos en relación con su cesación en el cargo, razonando que el puesto del actor era interino, las condiciones de este estaban preestablecidas en el momento de su designación y, además, el propio reglamento interno determina que dichos interinatos no se pueden extender más allá de seis meses.

**DUODÉCIMO:** Que, conforme se ha expuesto, es posible comprobar que la errónea calificación jurídica que postula el recurrente se abstrae de los presupuestos de hecho fijados por el juez del grado, que fundamentaron su decisión y que resultan ser inamovibles para este Tribunal. Es así como el arbitrio se construye soslayando que el fallo ha dado por acreditado que el demandante ostentó el cargo de jefe de departamento solo en calidad de interino; que esta designación no debió prolongarse más de seis meses y que, cesada ésta, volvería a percibir sus remuneraciones correspondientes al grado XII.

De ello se sigue que ni siquiera es posible entrar a analizar la idoneidad de la calificación jurídica propuesta por quién recurre, desde que para efectuar tal constatación sería necesario –previamente- modificar los hechos establecidos en el fallo, por la vía de ignorar o suprimir todos aquellos que el arbitrio desconoce en esta sede, lo que resulta del todo improcedente atendida la causal alegada, razón que por sí sola es suficiente para desestimarla.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, finalmente, en lo que hace a la causal de infracción de ley, ésta tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados. Por ello esta causal supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, de manera que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con esa intención. Del mismo modo, no es factible en esta causal impugnar el raciocinio valorativo que ha efectuado la sentencia de los medios de prueba aportados en el juicio, desde que esta apreciación incide en la determinación de los hechos de la causa, lo que – como ya se dijo- es ajeno al objetivo de la infracción de ley.



Asimismo, el recurrente debe indicar qué modalidad de infracción de ley es la que concurre en la especie: contravención formal de la norma, falta de aplicación de la misma, aplicación indebida o errada interpretación de la ley. Finalmente, las normas que se denuncian como infringidas deben tener influencia en lo dispositivo del fallo, esto es, deben revestir el carácter de ser decisoria litis.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, en lo que interesa al recurso, ya se han esbozado más arriba los hechos que tuvo por establecido el fallo en estudio, de los que se deriva, a su vez, la base para el cálculo de las indemnizaciones concedidas. Tal sustrato fáctico no puede ser impugnado por la causal de infracción de ley, que es lo que pretende el impugnante, al ligar el yerro con el artículo 459 N°4 del Estatuto Laboral norma que, por lo demás, no tiene carácter decisoria litis, al igual que los artículos “485 y siguientes” del mismo cuerpo legal, que no han sido relacionados con alguna norma sustantiva.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en este contexto, no puede argüirse un error de ley con influencia sustancial en lo decisorio, de modo que esta última causal también debe ser desestimada.

**II.- En cuanto al recurso de nulidad deducido por la parte denunciada:**

**DÉCIMO SEXTO:** Que la denunciada Corporación Nacional Forestal igualmente recurrió de nulidad en contra de la sentencia de marras, fundada en primer término en la causal de invalidación regulada en el artículo 478 letra b) del Código de la materia, por haberse dictado la sentencia infringiendo de manera patente las normas reguladoras de la prueba, transgresión que llevó a considerar que debía determinarse una indemnización por daño moral acorde al padecimiento de una enfermedad profesional determinado por la entidad facultada para ello.

Cita el considerando 14° de la sentencia del grado, que tuvo por acreditada la existencia de un trastorno adaptativo mixto y la regulación de la indemnización del daño moral por ese motivo, de lo que observa que el fallo estableció una correlación directa entre los hechos vividos por el denunciante, el trastorno referido y la cuantificación del daño moral.

Denuncia que el fallo carece de lógica, al dotar de valor a un informe médico como único elemento para determinar el daño moral, adjudicando las



remuneraciones equivalentes al tiempo máximo de recuperación de una patología que no puede valorarse, por cuanto el continente de ese diagnóstico es el informe médico emitido por el psiquiatra Álvaro Inzunza Peña, y no corresponde a una Resolución de Calificación de Enfermedad Profesional emanada de la entidad facultada para ello.

Estima que el vicio influyó en lo dispositivo del fallo respecto a la fórmula implementada por el sentenciador para el cálculo de la indemnización, en base al daño y tiempo de recuperación del trastorno, siendo la nulidad la única forma de corregirlo.

Concluye que por haberse acogido parcialmente la demanda, condenando a esa parte al pago de una millonaria indemnización por daño moral sin resolución de calificación de patología de base, corresponde que se acoja el recurso, se anule la sentencia y en su reemplazo se dicte otra sin nueva vista que rechace la acción de daño moral, o que rebaje prudencialmente el monto, en atención a la falta de pruebas del perjuicio invocado.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, como subsidiaria de la anterior, cita la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 5° y 77 bis de la Ley N° 16.744 y el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contenido en la Resolución Exenta N° 156 de 5 de marzo de 2018 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Luego de referirse al considerando 14° de la sentencia del tribunal de la instancia y citar el referido artículo 5° de la Ley N° 16.744, indica que el mencionado Compendio, en su capítulo II N° 3, contempla la existencia de un órgano denominado Comité de Calificación para patologías de salud mental, y que regula un procedimiento en su Libro III, Título III, letra c), sin que pueda el tribunal sustituir la opinión técnica de los organismos médicos competentes para sostener a partir del informe de un médico psiquiatra que la enfermedad sea causada por los hechos denunciados.

A su vez, añade, del análisis de los artículos 2314, 2316 y 2329 del Código Civil, se desprende que debe existir imputabilidad del daño para que sea procedente determinar la responsabilidad de indemnizar, como se



desprende de la redacción del último artículo mencionado, que, si bien establece el principio de reparación integral del daño, determina una limitación dada por la causalidad, en tanto sólo el daño que pueda imputarse al demandado debe ser reparado por éste.

De esa forma, observa, sin que exista calificación de las entidades facultadas para ello, en el sentido de que la enfermedad que señala sufrir el actor tiene su origen en el actuar de la denunciada, la sentencia incurre en infracción de ley al determinarlo como sustento del daño moral, vicio que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo al haberla condenado a indemnizar por este concepto.

Solicita que se anule la sentencia y conforme al mérito de la prueba rendida en el juicio se dicte sentencia de reemplazo que rebaje el monto al que fue condenada su representada en la cuantía que se estime conforme a derecho.

Al finalizar el recurso, solicita que se acoja éste con costas, invalidando la sentencia de acuerdo con los vicios señalados y en la forma en que fueron invocados, dictándose sentencia de reemplazo que declare que se rechaza la demanda en todas sus partes, o en subsidio que se rebaje el monto al que se condena a esa parte en la suma que se considere prudentemente conforme a derecho.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que para que prospere la causal principal es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es ostensible, patente, capaz de ser advertida a simple vista. Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión. Finalmente, el yerro denunciado necesariamente debe tener influencia en lo dispositivo del fallo.

**DÉCIMO NOVENO:** Que los requisitos recién señalados no se verifican en la especie, pues el recurrente se limita a discrepar de la ponderación de la documental aparejada al proceso, y postula en su lugar una nueva apreciación de la prueba favorable a la postura que ha sostenido en el juicio. Tal alegato no da cuenta, de manera alguna, de una infracción manifiesta a los parámetros de valoración de la evidencia. De hecho, el compareciente no denuncia cuál sería la regla de la sana crítica que se habría visto transgredida



en la sentencia, limitándose a indicar que el juez contraría la lógica. Sus argumentos apuntan únicamente a que en esta sede se valore nuevamente la prueba rendida de una forma que avale su teoría del caso, vale decir, que no existió el daño reclamado.

De esta forma, lo cierto es que no se satisfacen los requisitos de la causal establecida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por lo que necesariamente debe ser rechazada la causal principal.

**VIGÉSIMO:** Que tocante a la causal subsidiaria, ya se dijo al analizar el recurso de la denunciante que para que prospere, es necesario que el yerro que se denuncia tenga influencia en lo decisorio.

Es un requisito común a todas las causales del recurso de nulidad laboral que el vicio denunciado tenga vocación de influir en lo decisorio de la sentencia que se pretende invalidar. Ello se desprende del propio artículo 477, en cuanto señala que sólo será procedente el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva *“cuando aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido en lo dispositivo del fallo”* y del artículo 478, que preceptúa que *“no producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo”*.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en este orden de ideas, cabe puntualizar que en el caso *sublite* el recurrente ha indicado como disposiciones infringidas los artículos 5° y 77 bis de la Ley N° 16.744, el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y los artículos 2314, 2316 y 2329 del Código Civil, señalando que el yerro de derecho se comete en el motivo 14° del fallo.

Sin embargo, el impugnante razona -y sustenta los errores de ley- sobre consideraciones y normativa que nada tienen que ver con los razonamientos del fallo, pues el juez en parte alguna del considerando 14° -ni en el que le precede- homologa o asemeja los padecimientos del denunciante con los propios de una enfermedad profesional. Es más, las argumentaciones jurídicas contenidas en el recurso tampoco guardan relación con lo alegado en la contestación, en la que, luego de negar la existencia de las vulneraciones de garantías fundamentales, respecto del daño moral simplemente indica: *“A esta parte no le consta, y por lo tanto controvierte, el hecho de que el Sr. Sandoval, producto de la solicitud de retorno a sus*



*funciones y grado en propiedad, haya sufrido una conmoción sicológica la cual haya afectado su salud mental y, a la fecha, en razón de ello este con un tratamiento farmacológico.”*

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en consecuencia, al haberse acusado infracción de ley respecto de preceptos que no son aquellos que dan sustento jurídico al fallo impugnado, es menester concluir que estos supuestos yerros carecen de toda influencia en lo dispositivo del fallo, pues resultan inocuos para modificar el pronunciamiento del tribunal de base y resolver en un sentido distinto al que viene decidido.

Esto es motivo suficiente para rechazar el recurso de nulidad deducido por el denunciado también en este extremo.

Por las razones anteriores, y lo dispuesto en los artículos 477, 478 letras b), c) y e), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por la parte denunciante Juan Carlos Sandoval Vásquez, y por la parte denunciada Corporación Nacional Forestal, ambos contra la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT T-1161-2023, caratulados "Sandoval con Corporación Nacional Forestal", la que en consecuencia **no es nula**.

Regístrese y comuníquese.

Redactada por la Fiscal Judicial señora Macarena Troncoso L.

**Rol Laboral-Cobranza N° 3522-2024.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PZXEXYLSKDD



Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Fiscal Judicial Macarena Troncoso L. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintitres de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintitres de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PZXEXYLSKDD